

Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta
Sr. Estella Hoyos, Consejero
Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero
Sr. Quijano González, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero y Ponente
Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 18 de diciembre de 2003, ha examinado el *expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 24 de noviembre de 2003 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxx, por los daños producidos por jabalíes, en unos prados de siega de su propiedad*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 4 de diciembre de 2003, se procedió a darle entrada en el Registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 39/2003, iniciándose el cómputo del plazo para su evacuación, tal como dispone el artículo 53 del Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su Ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- Con fecha de 7 de mayo de 2003 se recibe en la Delegación Territorial de León, Servicio Territorial de Medio Ambiente, reclamación de indemnización, presentada por D. xxx por los daños producidos por jabalíes, en unos prados de siega, de su propiedad, en varios parajes en la localidad xxx.

Se estima que el daño se produjo el día 26 de abril de 2003,(a pesar de que la solicitud parece que se formula por el interesado el 13 de marzo, es decir, en un momento previo a aquél en que acaece el hecho lesivo) emitiendo informe el personal adscrito a la Reserva el día 28 del mismo mes y año, en el que manifestaba que "*el daño lo habían hecho los jabalíes*".

La valoración del daño, realizada el día 15 de mayo, por el Director Técnico de la Reserva Regional de Caza, asciende a la cantidad de 429,48 Euros.

Segundo.- Con fecha de 21 de mayo de 2003, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en esta provincia, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, nombra al Instructor del expediente. notificándose al interesado el 30 de mayo de 2003.

Tercero.- El día 16 de julio de 2003, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia y vista del mismo a interesado (recibiendo tal notificación el día 22 del mismo mes), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, sin que el interesado, concluido el plazo concedido al efecto, presente alegación alguna.

Cuarto.- La propuesta de resolución entiende que procede estimar la reclamación presentada por D. xxx.

Quinto.- La Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en esta provincia, en escrito de 20 de octubre de 2003, informa favorablemente la propuesta estimatoria.

Sexto.- El expediente remitido a este Consejo consta de un índice numerado de documentos sin foliar, como sería conveniente para facilitar su mejor manejo.

Y, en tal estado del expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León para que evacuara dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León emite dictamen en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4.1.h,1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen de acuerdo con lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno, por el que se determina el orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El artículo 106,2 de la Constitución establece que *"los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"*.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Tales preceptos han sido desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el *Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial*.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 1-3-1998; 21-4-1998; 29-10-1998; 28-1-1999; 1 y 25-10-1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (dictámenes de 27-3-2003, expte. Nº 183/2003; 6-2-2003, expte. Nº 3583/2002; y 9-1-2003, expte. nº 3251/2003), la responsabilidad patrimonial de la Administración pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

3ª.- El procedimiento administrativo seguido para la instrucción del expediente en este supuesto se ajusta a los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , posteriormente desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueban los procedimientos a seguir por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

La reclamación del interesado fue deducida dentro del plazo de un año que para ello existía, siendo presentada por persona legitimada para actuar como parte interesada en el presente procedimiento, en cuanto perjudicada patrimonialmente como consecuencia de los daños sufridos, según resulta de los documentos incorporados al expediente.

4ª.- Una vez realizadas estas consideraciones previas, en relación con la cuestión que nos ocupa, hemos de decir que, de acuerdo con el artículo 12.1, letra a), de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, "la

responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:

a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos...”.

Las Reservas Regionales de Caza tienen la consideración de terrenos cinegéticos, tal y como se establece en el artículo 19 de la Ley precitada.

El artículo 20.2 de la misma Ley señala que la titularidad cinegética de las Reservas Regionales de Caza corresponderá a la Junta de Castilla y León.

En este caso parece que está acreditado que los daños fueron producidos por un jabalí procedente de la Reserva Regional de Caza de Riaño, teniendo en cuenta el informe de los celadores que suscriben la reclamación y de la conformidad expuesta por el Director Técnico de la Reserva , por tanto , la Junta de Castilla y León debe indemnizar en la cuantía correspondiente.

No obstante, llama la atención lo extremadamente parco que resulta el informe del personal adscrito a la Reserva, en el que únicamente se detalla que el daño fue causado por jabalíes. Dada la importancia de los informes emitidos por estos agentes, a efectos de determinar la relación de causalidad a través de la que se concretaría, en su caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración, convendría que fueran más exhaustivos para poder tener conocimiento de los hechos acaecidos y de los daños ocasionados.

Debe también señalarse la importancia de que las solicitudes de indemnización contemplen cuantos datos sean precisos para que pueda producirse, con el menor margen de error, la evaluación de los daños. Así, en la medida de lo posible, debería expresarse si el daño de la parcela es total o parcial, si ha quedado sin uso en la época en que se produce el daño o si puede tener efectos posteriores para su aprovechamiento, aspectos todos ellos que ayudarían al evaluador del daño y al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

III CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina favorablemente la propuesta de resolución estimatoria de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por D. xxx por entender que resulta conforme con el ordenamiento jurídico.

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

LA PRESIDENTA

Fdo.- M^a José Salgueiro Cortiñas

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.- Jesús Besteiro Rivas